Varapalo judicial a la Junta por excluir a un sindicato de la Mesa de Conciertos Educativos

LA OPINIÓN. Granada

► El juzgado de lo Contencioso número 3 de Granada ha apreciado en un acuerdo de la Delegación de Educación una vulneración del derecho del libertad sindical, según la sentencia.

El fallo obliga a la Delegación a incluir en la mesa de la Comisión Provincial de Conciertos Educativos para el curso escolar 2006-07 al sindicato de la Plataforma por la Homologación, que fue excluido de este órgano pese a contar con más representación que otras fuerzas sindicales sí tenidas en cuenta. El portavoz de

la plataforma, José Antonio Funes, explicó que el fallo judicial reconoce el derecho del colectivo a participar en la Mesa de Conciertos y advierte a la Delegación de Educación, cuya titular es Carmen García Raya, que las instituciones también deben cumplir con la legalidad vigente. En la mesa hay delegados de UGT, CC OO, USO y CSIF.

El fallo sostiene que esa composición "indudablemente fue equivocada y contravino" el citado derecho. De hecho, la plataforma había pedido declarar nula de pleno derecho la constitución de la comisión, así como de

todos sus actos y el cese de todos los acuerdos y actuaciones derivadas de la misma por haberse producido concurriendo vulneración de derechos fundamentales.

Sobre este punto, el juzgado señala que la nulidad sólo afecta al acuerdo inicial sobre la constitución de la mesa, adoptado el 13 de enero de 2006, pues entiende que otros asuntos aprobados, de anularse ahora, pueden dañar los intereses de terceros.

El juzgado, asimismo, tampoco contempla la solicitud de la Plataforma de la Homologación

de imponer a la Delegación de Educación una indemnización simbólica de 6.000 euros en concepto de daños y perjuicios. La sentencia, al respecto, expone que "no ha lugar a declarar el derecho a la indemnización, pues no han sido acreditados ni pueden apreciarse los daños a la imagen pública que se alegan".

La sentencia tampoco reconoce la petición de los demandantes de cobrar las costas del proceso a la otra parte.

Los servicios jurídicos de la Junta pueden, dentro del plazo legal de quince días, presentar recurso de apelación.

LA OPINION DE GRANADA
26/09/06